

Boletín Oficial



DE LA PROVINCIA DE ZAMORA.

(Gaceta del 12 de Julio.)

MINISTERIO DE HACIENDA.

LEY.

DON ALFONSO XII,

Por la gracia de Dios Rey constitucional de España.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º Los gastos públicos para el año económico de 1877-78 se fijan en la cantidad de pesetas 734.485.458'81, según el adjunto estado letra A.

Art. 2.º Los ingresos del Estado para el referido año económico de 1877-78 por las contribuciones, impuestos, rentas y derechos se calculan en la suma de 734.360.580 pesetas, con arreglo al estado adjunto letra B.

No se incluye en los mencionados ingresos los que deben producir las ventas hechas y que se hagan de bienes desamortizados.

Art. 3.º Los ingresos por los productos de la venta de bienes desamortizados se calculan para dicho año económico en 33.943.337 pesetas, y los gastos imputables a los mismos por intereses y amortización de los bonos del Tesoro y otros conceptos se fijan en 33.943.337 pesetas, según el pormenor del adjunto estado letra C.

El exceso de los intereses de los bonos sobre la cantidad que en metálico se recaude por las ventas de bienes desamortizados, si lo hubiere, se cubrirá con el producto de la negociación de pagarés de compradores que sean de vencimientos posteriores a la fecha en que deban quedar amortizados los bonos.

Art. 4.º El cupo para el Tesoro durante el año económico de 1877 a 78 por la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería se fija en la suma de 165.500.000 pesetas, que se repartirán en proporción a la riqueza descubierta, y sin que en ningún caso la imposición pueda exceder del 21 por 100 de los productos líquidos.

Los recargos que los Ayuntamientos pueden imponer sobre el cupo para el Tesoro no excederán del 4

por 100 de la riqueza imponible.

El premio de cobranza, los demás gastos y las partidas fallidas se abonarán en la forma determinada por la ley de 21 de Julio de 1876.

Art. 5.º Se prorroga por un año la facultad que por la ley de 21 de Julio de 1876 se concedió a los contribuyentes cuyos débitos se hagan efectivos por medio de la adjudicación de fincas al Estado, para retraerías, pagando el principal débito, las costas de la ejecución y el interés correspondiente a la demora a razón de 6 por 100 anual.

Art. 6.º En los procedimientos para la cobranza de débitos a favor de la Hacienda, que son puramente administrativos con sujeción a la legislación vigente, ejercerán los Alcaldes las funciones que hoy ejercen los Jueces municipales.

Art. 7.º El empréstito nacional forzoso de 1873 será considerado como contribución para los efectos del párrafo quinto del art. 9.º de la ley de 21 de Julio de 1876, que autorizó al Gobierno para conceder perdonos de las contribuciones en determinados casos.

Art. 8.º La provincia de Navarra seguirá satisfaciendo anualmente al Estado en concepto de cupo de contribución de inmuebles, cultivo y ganadería la cifra de 2 millones de pesetas que le asignó para el año económico de 1876-77 el Real decreto de 19 de Febrero último.

Se autoriza al Gobierno para que, oyendo a la Diputación, vaya estableciendo en la misma provincia oportuna neutre y con las modificaciones de forma que las circunstancias locales exijan las demás contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios consignados ó que se consignen en los presupuestos generales del Estado para las demás de la Nación, siempre que no se hallaren planteados en la repetida provincia; pudiendo hacerlo por medio de encabezamientos si lo considerase conveniente a los intereses generales del país y a los de la provincia.

Art. 9.º El Gobierno podrá conceder moratoria para el pago de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería a los pueblos que justificaren haber perdido completamente

sus cosechas de dos ó más años por efecto de sequía extraordinaria.

Art. 10.º El recargo extraordinario de guerra de una novena parte de las cuotas de la contribución industrial y de comercio, establecido por el decreto-ley de 26 de Junio de 1874, queda suprimido desde 1.º de Julio de 1877, y a partir de la misma fecha se exigirá en concepto de recargo transitorio un 15 por 100 de las respectivas cuotas de tarifa.

Art. 11.º En las capitales de provincia y en Alcoy, Gracia, Sabadell, Jerez, Ferrol, Velez-Málaga, Cartagena, Gijon, Vigo, Reus, y en las demás poblaciones donde lo crea conveniente el Gobierno, se administrará la contribución industrial y de comercio directamente por la Hacienda; en los demás pueblos se administrará por los respectivos Municipios, para los cuales será obligatorio el encabezamiento con la Hacienda por el producto máximo que haya ofrecido desde 1870, aumentado con los recargos que establecen los artículos 10 y 12.

Los aumentos sucesivos serán íntegros para las Municipalidades, siempre que se obtengan por efecto de su acción administrativa y se hagan constar en las matrículas correspondientes.

Las faltas en las matrículas que la Administración de la Hacienda pública descubra por sí misma, pasados seis meses de la celebración de los respectivos contratos de encabezamiento, se considerarán aumentos a la cantidad encabezada. En las poblaciones obligadas al encabezamiento en que no aparezca matriculado industrial alguno, ó en que aparezcan sólo en número escaso con relación al de habitantes, podrá la Administración fijar un cupo de encabezamiento proporcional al de los pueblos colindantes, previo expediente en que se oirá al Ayuntamiento interesado, a la Comisión permanente de la Diputación provincial y al Jefe económico, resolviendo la Dirección general.

Tanto la Administración en su gestión directa, como los Ayuntamientos en la que ejercen a virtud de los encabezamientos, aprovecharán, en cuanto sea posible, el principio de agremiación.

Art. 12.º Todas las cuotas de la

contribución industrial y de comercio de las tarifas correspondientes a industrias representadas por la fabricación y la venta, ó solamente por la venta de cualquiera clase de efectos ó artículos, se recargarán con un 15 por 100, en equivalencia del impuesto del sello de ventas que queda suprimido.

Art. 13.º Podrán ser recargadas hasta en un 10 por 100 para los fondos municipales las cuotas de la contribución industrial que percibe el Tesoro, y hasta en un 25 por 100 en Madrid, quedando refundido en estos el recargo de 2 por 100 que el art. 14 de la ley de presupuestos de 21 de Julio de 1876 habia permitido a los pueblos cuyos presupuestos no bajan de 100.000 pesetas.

Art. 14.º Se autoriza al Ministro de Hacienda para reformar el reglamento de la contribución industrial y de comercio, y las tarifas anejas al mismo, procurando en estas atender, tanto al interés del Tesoro como a las reclamaciones justas que hayan hecho los contribuyentes de algunas clases.

Art. 15.º El Gobierno reformará el impuesto de derechos reales y transmisión de bienes, teniendo en cuenta lo prescrito en el art. 12 de la ley de presupuestos de 21 de Julio de 1876.

Los actos y contratos que no se hubieren presentado a la liquidación y pago del impuesto dentro de los plazos legales quedarán libres de las multas correspondientes si los interesados cumplieren ambos requisitos antes del 1.º de Enero de 1878.

El plazo que el párrafo primero del art. 21 de la ley de 21 de Julio de 1876 concedió a los compradores de bienes nacionales para otorgar las correspondientes escrituras y presentarlas a inscripción en las oficinas del Registro de la propiedad se prorroga hasta el 31 de Diciembre de 1877.

Art. 16.º El impuesto de cédulas personales se exigirá a domicilio durante el primer trimestre del año económico, previa la formación de padrones de todas las personas obligadas a proveerse de cédulas, entre las que se contará a los extranjeros domiciliados en el Reino, los cuales, por el hecho de satisfacer este im-

puesto, quedarán exentos del pago de derechos de inscripción en los Registros municipales.

La formación del padrón y el reparto de cédulas y cobro del impuesto serán obligatorios para los Ayuntamientos á quienes la Administración de la Hacienda encomiende dicho servicio, por el cual se les abonará el 4 por 100 del valor de las cuotas para el Tesoro.

El precio máximo de las cédulas personales será de 100 pesetas y para los mayores contribuyentes. El mínimo será de 50 céntimos.

Los Ayuntamientos podrán recargar las cédulas hasta en un 15 por 100 para las atenciones municipales.

Art. 17. Los Jefes, Oficiales, clases e individuos del cuerpo armado de orden público estarán sujetos al mismo descuento que actualmente sufren los demás institutos armados del Ejército en servicio activo.

Art. 18. Se autoriza al Ministro de Hacienda para arrendar en pública subasta los impuestos por canon de superficie y por el 1 por 100 sobre el producto bruto de las minas, y para celebrar con los centros mineros conciertos especiales sobre la base de que cubran las cantidades presupuestas por aquellos conceptos con un aumento por lo menos de 10 por 100.

Art. 19. El 5 por 100 sobre los ingresos de los presupuestos municipales se computará con relación á las cantidades que se hagan efectivas.

Art. 20. El gravamen del 15 por 100 de la renta líquida impuesto por el art. 8.º de la ley de presupuestos de 21 de Julio de 1876 á los perceptores de cargas de justicia que hubiesen sufrido en su capital la reducción de 11 por 100 por frutos civiles y amortización se entenderá que se eleva á 19 por 100 si solamente se hubiese descontado el 6 por 100 de frutos civiles, y á 20 por 100 en el caso de haberse rebajado sólo el 5 por 100 de amortización.

Art. 21. En lo sucesivo no se harán concesiones de honores de categorías de la Administración civil sine constricta sujeción á la base letra D de la ley de 29 de Junio de 1867; y las que se hagan en la indicada forma se publicarán en la *Gaceta de Madrid* dentro precisamente del plazo de un mes, á contar de la fecha de los Reales decretos de concesiones, señalándose el término de dos meses, á partir del día de la referida publicación, para que los interesados puedan satisfacer los derechos de la Hacienda. Pasado este término, la Dirección general de Contribuciones publicará en la *Gaceta* las concesiones confirmadas por el pago de los derechos, y la caducidad de aquellas cuyos interesados no hayan satisfecho el impuesto.

Art. 22. Desde 1.º de Julio de 1877 los individuos de la clase civil que sean agraciados con Cruces de la Orden del Mérito militar satisfa-

rán el impuesto sobre grandezas y títulos, honores y condecoraciones, con sujeción á la adjunta tarifa núm. 1.

Art. 23. Las concesiones de Cruces de las Ordenes civiles y las de la Orden del Mérito militar que se hagan á individuos de las clases civiles se publicarán asimismo en la *Gaceta de Madrid* dentro precisamente del plazo de un mes, contado desde la fecha de la concesión, señalándose el de dos meses, á partir del día de la publicación, para que los interesados satisfagan los derechos de la Hacienda. Pasado este término, los Ministerios de Estado y de la Guerra publicarán también en la *Gaceta* las concesiones confirmadas por el pago del impuesto, y la caducidad de aquellas cuyos interesados no hayan satisfecho los derechos correspondientes.

En las concesiones que se hagan libres de gastos se expresará necesariamente el servicio ó servicios en cuyo premio se otorgue la esención.

Art. 24. Los ferro-carriles y tranvías que no lleguen á 6 kilómetros y no enlacen con líneas generales quedan exentos del impuesto sobre las tarifas de los viajeros.

La distancia de 6 kilómetros se contará desde el punto de partida hasta el extremo de cada línea, y no sumando las diferentes líneas que constituyan una misma red.

Art. 25. Queda suprimido el impuesto sobre los carruajes de lujo, y autorizada su exacción por los Ayuntamientos como recurso municipal.

Art. 26. Se declaran caducados desde 1.º de Julio de 1877 los conciertos celebrados entre la Administración de la Hacienda y los fabricantes de azúcar peninsular por el impuesto transitorio que sobre este artículo y en equivalencia del de consumos se estableció por el Apéndice letra F de la ley de 26 de Diciembre de 1872, y que fué modificado por la tarifa que aprobó el artículo 18 de la ley de 21 de Julio de 1876.

A partir de la indicada fecha, se cobrará directamente el derecho de 8,80 pesetas por cada 100 kilogramos que señala la expresada tarifa, y únicamente podrá celebrar concierto la Administración si los fabricantes, aceptan como base del mismo la producción, término medio de 20 millones de kilogramos.

Art. 27. Queda sin efecto la autorización concedida al Gobierno por el art. 15 de la ley de presupuestos de 21 de Julio de 1876 para imponer á las ganancias de loterías un descuento que no excediera de 10 por 100.

Art. 28. Se establece un impuesto extraordinario y transitorio sobre los valores de los artículos de comercio exterior que á continuación se expresan, y en la cuantía que también se determina:

El 1 por 100 á la importación de las mercancías cuyos derechos de Aduanas sean de 3 á 9 por 100, ambos inclusive,

El 4 por 100 del valor á la importación del tabaco para particulares, y de las mercancías cuyos derechos de Aduanas sean de 10 por 100 en adelante, excepto los tejidos y los artículos gravados con el impuesto transitorio por consumo.

Veinte pesetas por cada hectólitro de aguardiente, producto ó procedente del extranjero.

Doce pesetas 50 céntimos por cada 100 kilogramos de petróleo y demás aceites minerales rectificadas y la bencina.

Ocho pesetas por cada 100 kilogramos de aceite de comer.

Veinticinco pesetas por cada 100 kilogramos de aceite de coco, palma, algodón y demás granos y semillas, excepto los de linaza y los secantes.

El aguardiente, el petróleo y los demás aceites minerales rectificadas, así como la bencina, seguirán pagando además, como hasta ahora, el impuesto transitorio de la tarifa á que se refiere el art. 18 de la ley de presupuestos de 21 de Julio de 1876.

Art. 29. El carbon mineral y el cok pagaran á su importación en España el derecho fiscal de 2 pesetas 50 céntimos por tonelada.

Art. 30. Queda sin efecto la autorización concedida al Ministerio de Hacienda por el párrafo segundo del art. 18 de la ley de presupuestos de 21 de Julio de 1876 para imponer un derecho de exportación *ad valorem* al comercio en bruto procedente de todas las provincias españolas.

Art. 31. El Gobierno rectificará los valores y las clasificaciones del Arancel de Aduanas vigente, y convertirá en derechos fijos los que en la actualidad se hallan establecidos al avalúo, en cumplimiento de lo que disponen los últimos párrafos de las bases 7.ª y 8.ª de la ley de Aranceles de Aduanas de 1.º de Julio de 1869.

Art. 32. Se declara terminada la prórroga de la franquicia que para determinados artículos de material para ferro-carriles concedió la ley de 26 de Diciembre de 1872, y se practicará desde luego por la Dirección de Aduanas, y como servicio preferente, una liquidación general del material autorizado é introducido por las empresas de ferro-carriles durante el tiempo que han disfrutado de este privilegio, á las cuales se exigirá el ingreso en metálico de los derechos correspondientes al Tesoro por lo que resulte importado de exceso ó sin la debida autorización.

Art. 33. Se declara subsistente el art. 19 de la ley de 21 de Julio de 1876 para las empresas que hasta el día se hayan acogido á sus disposiciones.

Se deroga para las demás.

Art. 34. En lo sucesivo todas las empresas de ferro-carriles que hayan disfrutado franquicia durante la construcción y los 10 primeros años de explotación, y las que no disfruten subvención alguna del Estado, ni franquicia ni anticipo reintegrable, pagarán un derecho de 10

por 100, que fijará el Gobierno, por los artículos siguientes que introduzcan del extranjero:

Barras-carriles de hierro y de acero, placas de union, tornillos, escarpas y tirafondos para la vía, traviesas de hierro, tirantes para la vía, y los platos, roldanas y tornillos de ojo propios para su asiento, cambios de vías completos, de hierro y acero, y las piezas sueltas para los mismos, llantas y ruedas de hierro y acero para locomotoras y tenders, llantas y ruedas de hierro y acero para coches y wagones, ejes de hierro y acero para locomotoras, tenders, coches y wagones, cojinetes de hierro fundidos, muelles de acero para locomotoras, tenders, coches y wagones, bastidores de hierro para wagones, topes de hierro para coches y wagones, amarras de hierro para los mismos, piezas de hierro para puentes, plataformas de hierro giratorias, coches para viajeros y wagones de todas clases, cobre en tubos y muelles espirales de acero.

Los artículos no expresados en la anterior relación adeudarán los derechos señalados en el Arancel de Aduanas.

Art. 35. Queda facultado el Gobierno para imponer un recargo en los derechos de importación y en los de navegación para los productos, buques y procedencias de los países que de algún modo perjudiquen especialmente á nuestros productos y á nuestro comercio, y para no aplicar las reducciones de derechos que resulten de la rectificación de los Aranceles de Aduanas sino á los productos y procedencias de las Naciones que otorgnen á España el trato de la Nación más favorecida.

Art. 36. Queda igualmente facultado el Gobierno para imponer un recargo en los derechos de importación para los productos de América y Asia que procedan de los depósitos extranjeros de Europa.

Art. 37. Las modificaciones que en virtud de los artículos 28 y siguientes sean introducidas en los actuales impuestos no se aplicarán á las mercancías y buques respecto de los cuales se justificó debidamente que salieron de los puertos de procedencia antes de la promulgación de esta ley.

Art. 38. Se autoriza al Ministro de Estado para que de acuerdo con el de Hacienda revise las tarifas consulares con el objeto de atreer los ingresos para el Estado sin graves perjuicios para el comercio y la navegación.

Art. 39. Se hace extensivo el impuesto de consumos en todas las capitales de provincia y en las poblaciones que tengan 15.000 ó más almas á las especies que comprende la adjunta tarifa núm. 2, de los derechos con que aquellas se han de gravar para el Estado, considerándose esta nueva tarifa como adición á la aprobada por el art. 7.º de la ley de 21 de Julio de 1876, de la cual se eli minará la sal común.

Art. 40. Los encabezamientos

actuales se considerarán modificados en la proporción por habitante que corresponda a la alteración de productos que debe ofrecer el aumento y la eliminación de especies que determina el artículo anterior.

Art. 41. Será obligatoria para la Hacienda la administración directa del impuesto de consumos, excepción hecha del de la sal, en las capitales de las provincias de Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cádiz, Castellón, Córdoba, Coruña, Granada, Jaén, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza y Baleares. El Tesoro recaudará con los derechos para el Estado los recargos municipales, entregando su importe en los días 8, 15, 23 y último de cada mes a los Ayuntamientos, con la deducción del 10 por 100 por gastos de administración.

Sin embargo, los Municipios de las mencionadas capitales de provincia que deseen seguir administrando por sí mismo el impuesto tendrán derecho a ello si aceptan en sus actuales encabezamientos, además de las modificaciones consiguientes a lo dispuesto por los artículos 39 y 40, el aumento por habitante (según la clase en que esté cada población) que corresponda al de 2 millones de pesetas que se espera obtener de beneficio para la Hacienda con la administración directa en las dichas 22 capitales de provincia.

Afinjar el aumento en los encabezamientos, el Gobierno tendrá presente para subsanar la desigualdad que pudiera resultar respecto de algún Ayuntamiento por haber aceptado en mayor grado que otros el segundo de los recargos establecido por el art. 7.º de la ley de 21 de Julio de 1876.

Las Administraciones económicas respectivas se incautarán de la administración del impuesto si, durante los ocho días siguientes a la notificación de lo que dispone este artículo al Ayuntamiento, dicha corporación no le da noticia de aceptar el aumento referido.

Art. 42. El atraso de un mes para el pago del importe de los encabezamientos de las capitales de provincia impone a la Hacienda pública la obligación de incautarse de la administración del impuesto.

Art. 43. Se autoriza a los Ayuntamientos para que graven en beneficio de los presupuestos municipales el consumo del cacao, la canela, el azúcar, la pimienta, el té, el café, el bacalao, y el pez-palo hasta una cantidad igual a la que estas especies pagan por el derecho transitorio de Aduanas.

Se autoriza al Gobierno para cobrar en las Aduanas después de las informaciones que estime, y en concepto de recargo municipal, una cuota igual a la que como impuesto transitorio sobre los frutos coloniales, el bacalao y pez-palo contiene la tarifa número 2, adjunta a la ley de

21 de Julio de 1876, compensando a los Ayuntamientos con rebajas en el impuesto de la sal, y el 5 por 100 sobre los presupuestos de dichas corporaciones.

Art. 44. Se autoriza al Gobierno para rectificar las encabezamientos de aquellos pueblos que justifiquen debidamente que su población es inferior en más de una tercera parte a la que se les atribuye en el censo de 1860.

Art. 45. El Gobierno exigirá con todo rigor a los Ayuntamientos los impuestos corrientes; pero respecto de los atrasos de consumos, del 5 por 100 de ingresos municipales y del impuesto personal, podrá conceder moratorias y otorgar en todo caso compensaciones a los Ayuntamientos que lo soliciten. Estos, para obtener moratorias, deberán probar la imposibilidad de pagar de una vez sus atrasos.

Las compensaciones se harán entre los débitos liquidados hasta el 30 de Junio último, y toda clase de créditos contra el Estado que tengan a su favor las corporaciones municipales.

Los Ayuntamientos responden de los impuestos que recaudan por encabezamientos con las rentas y bienes propios del Municipio, y no con los bienes particulares de los Concejales. Estos sólo responden *in solutum* de las cantidades efectivamente recaudadas y no entregadas en Tesorería, a no ser que falten a las leyes o reglamentos, o sean culpables de morosidad o negligencia.

Art. 46. La autorización concedida al Gobierno por el párrafo sexto del art. 9.º de la ley de presupuestos de 21 de Julio de 1876 para relevar en ciertos casos del pago de la contribución de consumos correspondiente al año de 1874-75 se hace extensiva al primer semestre de 1875-76 en favor de los pueblos que continuaron bloqueados por los carlistas hasta los últimos días de ese semestre.

Art. 47. En sustitución del actual impuesto sobre el consumo de la sal, que se suprime a partir del 1.º de Julio de 1877, se establecen desde la misma fecha los dos impuestos siguientes: uno, exigible directamente de los Ayuntamientos, cuyo tipo de imposición para determinar el cupo correspondiente a cada localidad será una peseta por habitante; y otro, que se fija en la suma de 1.500.000 pesetas, repartibles entre todos los individuos que explotan salinas, minas y fábricas de sal, en proporción a la que ordinariamente expendan para el consumo de la Península e islas adyacentes.

Art. 48. En equivalencia del gravamen que el artículo anterior impone a los Ayuntamientos, y que se calcula en 17 millones de pesetas, con arreglo a la población actual, se concede a las referidas corporaciones el derecho de la exclusiva en la venta de la sal, pudiendo ejercitarlo directamente ó por medio de

arrendamiento, si no prefieren recaudar este impuesto a la entrada de las poblaciones, ó por cualquiera otro de los medios establecidos para la contribución de consumos.

Art. 49. La Administración de la Hacienda pública formará la estadística de la producción ordinaria de sal con destino al consumo de la Península e islas adyacentes, haciendo con sujeción a ella el repartimiento entre todos los mineros y fabricantes de cupo fijo de 1.500.000 pesetas determinado por el art. 47, pudiendo, si lo considera conveniente, celebrar con ciertos con los productores para el cobro del impuesto, y quedando autorizada para intervenir en la forma que estime mejor las fábricas y minas cuyos explotadores no crean justa la cantidad que se les imponga.

Art. 50. Así el impuesto a cobrar de los Ayuntamientos como el imputable a los explotadores, se cobrará por trimestres, siendo precedente la vía de apremios a los 15 días del vencimiento.

Art. 51. Los depósitos de sal existentes hoy en las poblaciones quedarán sujetos al aforo para someterlos al impuesto y a las disposiciones de esta ley.

Art. 52. Queda prohibida la explotación de minas, fábricas y espuñeros de sal y terrenos salobres, y el hacer venta alguna de dicho artículo sin que previamente se justifique tener satisfecho al corriente el impuesto de fabricación. Los que falten a esta disposición serán considerados como defraudadores de la Hacienda pública.

Art. 53. Las salinas del litoral que no quieran ser incluidas en el millón y medio de pesetas repartible entre los fabricantes no podrán vender sal para el consumo, y de hacerlo quedarán sujetas a las penas impuestas a los defraudadores.

Art. 54. Las salinas de la Nación que se hallan en estado de venta podrán arrendarse, estableciendo como condición precisa la obligación del arrendatario a satisfacer el impuesto de fabricación.

La cantidad que por este concepto se recaude se bajará proporcionalmente de la repartida a los demás productores.

Art. 55. La Hacienda pública concurrirá con los particulares a la venta al por mayor de la sal perteneciente al Estado en las salinas de Torrevieja, cuya explotación conserva en cumplimiento del precepto consignado en el art. 5.º de la ley de 16 de Junio de 1869.

Los precios de venta se fijarán por los del mercado, así para la exportación como para el consumo interior, teniendo en cuenta, respecto de este último, el impuesto de fabricación que se establece por esta ley.

Art. 56. Se autoriza al Gobierno para arrendar en participación y mediante pública subasta las salinas de Torrevieja, asegurando el mayor producto que hayan ofrecido en años anteriores,

Art. 57. Se aumenta en 10 céntimos de peseta el precio del porte de cada carta que circule de unas a otras poblaciones de la Península e islas adyacentes, ó que desde las mismas se remita a las provincias españolas de Ultramar. Este aumento de precio se hará efectivo elevando a 15 céntimos el valor del sello de guerra de 5 que actualmente se impone en la expresada correspondencia.

Del mismo modo se aumentarán 10 céntimos al sello de 5 con que hoy se portean las tarjetas postales que circulan entre la Península e islas adyacentes y las que se dirigen a nuestras posesiones de Ultramar.

El porte de 25 céntimos, de 50 céntimos y de peseta por cada kilogramo que hoy satisfacen los impresos comprendidos en la casilla cuarta de la tarifa nacional, vigente se aumenta también en 10 céntimos de sello de guerra.

El derecho único é invariable de 50 céntimos para los certificados de todas clases que circulan en la Península e islas adyacentes y posesiones españolas de Ultramar se aumentará igualmente con otros 50 céntimos de peseta. Este aumento será solo de 25 céntimos para los impresos que hoy pagan por derecho de certificado otros 25 céntimos; ambos recargos se satisfarán en sellos de guerra.

Se aumenta además en 5 céntimos de peseta el porte señalado para cada una de las cartas ó pliegos é impresos que circulan en el interior de las poblaciones de España e islas adyacentes.

La Administración pública examinará como corresponda y decidirá en términos de justicia y en la forma debida cualquiera reclamación de indemnización presentada por la Empresa del Timbre por los perjuicios que justifique haberle sido causados por los recargos establecidos sobre la renta después de la celebración del contrato existente.

Art. 58. Se autoriza al Gobierno para que, si lo cree conveniente, se supriman todos los sellos sueltos de contratación, espendiéndose en su equivalencia para contratos de inquilinato, papel timbrado de los mismos precios y clases á que corresponden los sellos que se suprimen; asimismo para que los títulos y acciones que se emitan por Bancos y Sociedades sean timbrados en la Fábrica Nacional del Sello, estampándose el que corresponda en los mismos documentos, como también para que las facturas de recibos y cuentas lleven el sello ordinario y el de guerra que señalan las leyes.

Art. 59. Se amplía la autorización 3.ª párrafo segundo del art. 9.º de la ley de presupuestos de 21 de Julio del año anterior, referente á la compra por administración durante tres años del tabaco en hoja procedente de las islas Canarias, para adquirir también directamente de los fabricantes y con destino al consumo de la Península 500 millares

de cigarros elaborados durante cada uno de los años económicos de 77-78 y 78-79.

Art. 60. En lo sucesivo únicamente se permitirán y serán legales las rifas cuyos premios sean á pagar en metálico, y cuyos sorteos se sometan á los de la Lotería Nacional, quedando por tanto prohibidas todas las que no reúnan las dos condiciones expresadas.

Se exceptúan aquellas rifas que para objetos benéficos ó arbitrios municipales cuenten más de 30 años de existencia, paguen sus premios en metálico y contribuyan al Estado con el descuento que sobre las ganancias actualmente satisfacen.

Continuarán exceptuadas de todo impuesto las rifas que se celebren con aplicación al sostenimiento de Hospitales, Asilos ú Hospicios, que mantengan diariamente á 500 pobres por lo ménos, siempre que los establecimientos acrediten no percibir recurso alguno permanente de fondos generales, provinciales ni municipales, y que los gastos de administración de las rifas no exceden del 6 por 100 de los ingresos.

Art. 61. Las obligaciones del Tesoro sobre la renta de Aduanas que el Gobierno emita en virtud de la autorización concedida para la conversión de la Deuda del Tesoro estarán libres de todo gravamen ó contribución ordinaria ó extraordinaria que pudiera imponerse en lo sucesivo.

Art. 62. La acuñación de plata seguirá haciéndose por cuenta del Estado.

Art. 63. Los productos de la redención del servicio militar, que deben ingresar en las Cajas del Tesoro con arreglo al art. 5.º de la ley de 21 de Julio de 1876, se aplicarán al presupuesto del Estado en una cantidad igual á los préstamos que al publicarse la citada ley el Consejo de Administración del fondo de redenciones y enganches tenía hechos al Tesoro público, formalizándose por este el consiguiente reembolso. El exceso, cuando resulte ingresará en concepto de depósito á disposición del referido Consejo.

Art. 64. Se fija en la cuarta parte del total importe del presupuesto de gastos el máximun á que en el mismo podrá llegar la deuda flotante del Tesoro, para cubrir obligaciones del referido presupuesto. Dentro del límite expresado podrá el Gobierno adquirir sumas á préstamo, ó verificar cualquiera operación de Tesorería; pero solo en los casos de guerra civil ó extranjera ó de grave alteración del orden público podrá, sin otra autorización especial, excederse del máximun fijado para allegar recursos en concepto de Deuda flotante del Tesoro.

Art. 65. Se autoriza al Gobierno para reformar la tarifa de arbitrios establecida por el decreto-ley de 4 de Junio de 1875 con destino á las obras del puerto de Cartagena.

Art. 66. Queda autorizado el Gobierno para hacer todas las eco-

nomías que sean convenientes aun en los servicios que se hallen organizados por medidas de carácter legislativo.

Art. 67. El crédito de 3.600000 pesetas concedido por la ley de 7 de Marzo de 1873 para reforma y ampliación de la red telegráfica se limitará á la cantidad necesaria para el pago de las obras ya hechas y de aquellas cuya suspensión, por estar ya en tramitación ó ejecución, causaría al Estado mayores perjuicios que su terminación, quedando anulado el resto del crédito.

Art. 68. Se fija en un millon de pesetas la cantidad en que, según la disposición 7.ª de la Sección 4.ª del presupuesto de gastos, deberá considerarse ampliado el crédito concedido al Material de Ingenieros para atender á obras de defensa de las posiciones militares de Zaragoza, Pamplona y Búrgos.

Art. 69. Las cantidades que ingresen en el Tesoro por enagenación de cuarteles y otras fincas militares se pondrán por el Ministerio de Hacienda á disposición del de la Guerra, para que las invierta en la construcción de edificios para el servicio militar.

Art. 70. Se autoriza al Ministro de Fomento para aumentar el importe de las matrículas con el pago de derechos académicos, destinando directamente su producto á mejorar las condiciones de la enseñanza oficial en los Institutos y las Universidades.

Art. 71. Queda subsistente la autorización concedida al Gobierno en el segundo artículo adicional de la ley de presupuestos publicada en 21 de Junio de 1876.

Art. 72. El art. 3.º de la ley de 25 de Junio de 1870 se entenderá modificado en la forma siguiente:

«Estarán sujetos á la prestación de fianza aquellos funcionarios de quienes las instrucciones lo exijan para la seguridad de los fondos efectos que manejen ó custodien.

Las fianzas podrán constituirse:

- 1.º En metálico.
- 2.º En efectos públicos, al cambio, término medio, de la cotización oficial del mes anterior al en que se constituya la fianza.
- 3.º En fincas rústicas, y
- 4.º En fincas urbanas situadas en capitales de provincia ó en poblaciones que excedan de 20.000 almas, estimándose su valor por la tercera parte del que resulte capitalizando la renta líquida inponible amillarada al 5 por 100 en rústicas y al 4 por 100 en las urbanas.

Por las fianzas que se constituyan en metálico á favor del Estado para garantía de destinos públicos se abonará el mismo tanto por 100 de interés que devengue oficialmente la Deuda flotante del Tesoro.

Art. 73. Los nombramientos de Inspectores y Subinspectores de vigilancia serán de libre elección; pero no servirán para dar categoría administrativa que habilite para otros destinos ó ascensos.

Art 74. Los empleados nombrados de Real orden con anterioridad á la ley de 21 de Julio de 1876 se comprenderá para todos los efectos legales en el escalafon mandado formar por la misma, y en la categoría que con arreglo al sueldo que entonces disfrutaban les correspondía, aun cuando lo percibiesen de los fondos de Beneficencia, secuestros ó cualquier otro especial.

Art. 75. Las disposiciones contenidas en los adjuntos estados letras A y C se entenderán parte integrante de esta ley.

Por tanto: Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á once de Julio de mil ochocientos setenta y siete.

YO EL REY.
El Ministro de Hacienda,
José García Barzanallana.

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA.

Negociado 1.º.—Presupuestos.

Desde que en circular de 17 de Enero último, publicada en el número 87 del Boletín oficial, correspondiente al día 19, recomendó este Gobierno á los Ayuntamientos de esta provincia la remisión al mismo de una copia del presupuesto municipal que ha de regir en el ejercicio del año económico de 1877 á 78, para corregir las extralimitaciones legales si las tuviere, en uso de las facultades que le concede la disposición 9.ª artículo 1.º de la ley de 16 de Diciembre último, reformando la municipal y provincial, son muy pocos los municipios que han cumplido dicho precepto. Y si bien esta demora y apatía de las municipalidades podía tolerarse, cuando aun no se habia publicado la ley de presupuestos del Estado, hoy que se inserta esta en el Boletín oficial de esta fecha, y que por consiguiente son conocidos los recursos legales que pueden utilizar los Ayuntamientos para cubrir el déficit de sus respectivos presupuestos, este Gobierno recuerda á los mismos sus obligaciones respecto del asunto que nos ocupa.

En su vista prevengo á los Alcaldes que tengan en descubierto servicio de tanta importancia, remitan á este Gobierno en el preciso término de diez dias una copia autorizada de su respectivo presupuesto y el resumen á que se refiere la disposición 9.ª, artículo 1.º de la ley ya mencionada; en la inteligencia que, si no lo verifican, les exigiré el máximun de la multa que determina el artículo 175 de la ley municipal, con que desde ahora quedan conminados.

Con el objeto de que los presupuestos contengan todos los gas-

tos obligatorios, que además de los que previene el artículo 127 de esta ley, exigen las disposiciones vigentes, recuerdo á los Alcaldes la obligación en que están de consignar en los mismos: 1.º la partida que crean suficiente para atender á los gastos de formación de un censo general de población con arreglo á lo dispuesto en Real orden circular de 10 de Febrero último, inserta en el número 101 del Boletín oficial; 2.º el importe de una anualidad de suscripción á la Gaceta agrícola, conforme determina la circular publicada en el número 107 de dicho periódico oficial, y 3.º las cantidades que por los conceptos de personal, material, alquileres y retribuciones adeudan los pueblos á los maestros de instrucción primaria según está mandado por circular de este Gobierno de 25 de Mayo anterior inserta en el número 141 de referida publicación. Además, como he venido anotando, que algunas Juntas municipales cuyas corporaciones son las llamadas por la ley á prestar su aprobación á los presupuestos formados por los Ayuntamientos, se componen de mayor número de contribuyentes de los señalados por la ley, lo cual podría producir la nulidad de sus acuerdos, creo conveniente dejar consignado, que conforme previene el párrafo 2.º, disposición 9.ª, art. 1.º de la ley ya mencionada, la Asamblea de asociados debe componerse de un número de contribuyentes igual al de los Concejales elegidos en la forma que determina el capítulo 3.º de la ley municipal.

Del recibo de la presente y de cumplimentarla en todas sus partes me darán los Alcaldes el oportuno aviso.

Zamora 24 de Julio de 1877.
El Gobernador,
Gabriel Sisto Gimenez.

Segun me participa el Sr. Alcalde de Morales de Toro, se halla depositada de su orden una pollina de un año de edad, vocablanca, de cuatro cuartas y seis dedos de alzada, pelo negro, lanuda á la parte de la barriga y esquilada lo que coje el aparejo.

Lo que se hace público en este periódico oficial á fin de que llegue á conocimiento de su dueño, el que se presentará á recogerla en término de diez dias, previo pago de los gastos ocasionados en su custodia y manutención, así como el de la inserción de este anuncio; pues pasados estos se procederá á su venta en pública subasta en este Gobierno civil de provincia.

Zamora 14 de Julio de 1877.
El Gobernador,
Gabriel Sisto Gimenez.

Importante de la Agencia de Conde é hijo. —Por la Administración económica de esta provincia se reclaman con urgencia las matrículas de subsidio: escitamos á nuestros suscritores den cumplimiento á indicado servicio, para evitar gastos de apremio. Como muy pronto han de publicarse los cupos señalados á los pueblos por el impuesto de sal, conviene que los Ayuntamientos en la 1.ª sesión acuerden los medios de cubrirles en unión de los asociados en triple número, y remitan copia certificada en papel del sello 11.º á la Administración económica.

Nos ocupamos en el arreglo de los modelos para los repartimientos del impuesto de sal, y probablemente en el número próximo les anunciaremos para la venta, así como de los de consumos y cereales.